

Informe Legal. Proyecto “Pozo Exploratorio Argerich-1 en Bloque CAN 100” - EX-2023-50348355- -APN-DGAYF#MAD

La Ley General del Ambiente n.º 25.675, establece que la evaluación de impacto ambiental (EIA) constituye una de las herramientas de política y gestión ambiental.

Para ello, determina que todo proyecto de obra o actividad que, en el territorio de la Nación, que sea susceptible de degradar el ambiente en forma significativa, se encuentra sujeto a un procedimiento de EIA, previo a su ejecución (artículos 8, 11, 12 y 13).

Esta herramienta de gestión constituye entonces un procedimiento técnico administrativo que permite una toma de decisión informada por parte de la autoridad ambiental competente respecto de la viabilidad ambiental de un proyecto y su gestión ambiental.

Cabe indicar que, a su vez, el Decreto n.º 481/2003 designa al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAYDS), como autoridad de aplicación de la norma de presupuestos mínimos.

Por otro lado, el artículo 1 de la Ley Nacional de Hidrocarburos n.º 17319, y sus modificatorias, determinan que los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado Nacional o de los Estados provinciales, según el ámbito territorial en que se encuentre.

La citada ley establece asimismo que pertenecen al Estado Nacional los yacimientos de hidrocarburos que se hallaren a partir de las doce (12) millas marinas medidas desde las líneas de base establecidas por la Ley n.º 23.968, hasta el límite exterior de la plataforma continental, y que pertenecen a los Estados provinciales los yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en sus territorios, incluyendo los situados en el mar adyacente a sus costas hasta una distancia de doce (12) millas marinas medidas desde las líneas de base establecidas por la Ley N° 23.968.

El artículo 3 de la referida ley determina que el Poder Ejecutivo Nacional fijará la política nacional con respecto a las actividades mencionadas en el artículo 2 (actividades relativas a la explotación, industrialización, transporte y comercialización de los hidrocarburos), teniendo como objetivo principal satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país con la producción de sus yacimientos, manteniendo reservas para asegurar esa finalidad.

Como consecuencia de ello, se dicta la Resolución Conjunta SE-SAYDS n.º 3/2019, por medio de la cual se establecen los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de los proyectos de obras o actividades de exploración y explotación hidrocarburífera, incluyendo abandono de pozos e instalaciones, a realizarse en los permisos de reconocimiento superficial, permisos de exploración, o concesiones de explotación de hidrocarburos, en el ámbito territorial ubicado a partir de las DOCE (12)

millas marinas medidas desde las líneas de base establecidas por la Ley n.º 23.968 y sus modificatorias, hasta el límite exterior de la plataforma continental, que sean susceptibles de degradar en forma significativa el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población.

Dicha norma establece que toda persona titular de un permiso de reconocimiento superficial, permiso de exploración y/o concesión de explotación, proponente de un proyecto en los términos de su Anexo II, deberá cumplir —de forma previa a la ejecución del proyecto— con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental (EIA) y obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) emitida por el actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS) en los términos del artículo 8 del Anexo I de la mencionada resolución (artículo 3).

Por su parte, el Decreto n.º 50/2019 dispuso que corresponde a la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación (SCCDEI) intervenir en los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), en el ámbito de su competencia.

Asimismo, mediante la Resolución MAYDS N° 475/2020, se delega en dicha Secretaría, el ejercicio de la facultad para emitir la Declaración de impacto Ambiental (DIA), que contendrá la aprobación o rechazo de la realización de los proyectos de obras o actividades sometidos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En cuanto a la Dirección Nacional de Evaluación Ambiental (DNEA), conforme la DA N° 262/2020, tiene entre sus competencias impulsar y desarrollar la implementación de la EIA como parte de la política y la gestión ambiental. Por su parte, a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Análisis de Riesgo Ambiental (DEIAYARA) le compete sustanciar el procedimiento de EIA en el ámbito de competencia nacional.

Entonces, corresponde a la autoridad ambiental, en una primera instancia o etapa inicial del procedimiento de EIA, realizar la denominada categorización o *screening* del proyecto. Esta etapa implica *determinar si un proyecto debe estar o no sujeto a un procedimiento de EIA*.¹

En ese sentido, el artículo 3 del Anexo I de la Resolución SE-SAYDS N°3/19 establece que corresponde a esta autoridad ambiental el categorizar los avisos de proyecto.

Luego y como instancia del procedimiento relativa a la toma de decisión sobre la viabilidad de los proyectos sometidos a EIA, se dispone en el artículo 8 del Anexo I de la Resolución SE-SAYDS N°3/19 que será la autoridad ambiental quien emitirá la Declaración de Impacto Ambiental, (DIA), la que podrá contener la aprobación de la realización del proyecto, o el rechazo a la realización del proyecto.

¹ SAYDS (2019), “Guía para la elaboración de estudios de impacto ambiental”, página 19. Disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/ambiente/desarrollo-sostenible/evaluacion-ambiental/guias-de-evaluacion-ambiental/esia>

En ese marco, el Proyecto “Perforación de un pozo exploratorio, denominado “Argerich-1” Cuenca Argentina Norte (Bloque CAN_100)” fue oportunamente sometido al correspondiente proceso de EIA, que concluyó en la aprobación instrumentada mediante Resolución SCCDSEI N° 19/22.

La Resolución SCCDSEI N° 19/2022 aprueba la realización del Proyecto “Perforación de un Pozo Exploratorio, Denominado “Argerich-1” Cuenca Argentina Norte (BLOQUE CAN 100)” presentado por la Empresa Equinor Argentina B.V. Sucursal Argentina (C.U.I.T. N° 30-71578830-2), en los términos del artículo 12 de la Ley General del Ambiente N° 25.675 y el artículo 8 del Anexo I de la Resolución Conjunta SE- SAYS N° 3/2019.

La resolución mencionada, previendo que los proyectos pueden someterse a cambios de diversa índole en su diseño, establece en su artículo 4 que toda modificación relativa al alcance y características del Proyecto o su Plan de Gestión Ambiental deberá ser informada previamente y con la debida antelación a la autoridad, a los fines de verificar la correspondiente evaluación. Se encuentra comprendida en este artículo, en referencia al proyecto y de manera no taxativa, la modificación referida a la ventana temporal de trabajo.

Surge entonces del procedimiento descripto, que frente a la voluntad o necesidad de modificar un proyecto que ya ha sido aprobado mediante una DIA, se proceda a realizar el análisis del cauce administrativo correspondiente.

Al respecto, en primer lugar debe tenerse presente que la Ley N° 19.549 en su artículo 1 establece que los administrados tienen derecho a ser oídos, realizar peticiones, exponer las razones de sus pretensiones y a una decisión fundada sobre las peticiones que formulen.

Como correlato de esos derechos, es obligación de los organismos públicos nacionales expedirse sobre las cuestiones que le sean planteadas en el marco de sus respectivas competencias. Esta respuesta al administrado, además de estar motivada y fundada en los antecedentes de hecho y de derecho correspondientes, debe ser tramitada conforme a los principios de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites.

En dicho marco debe necesariamente tenerse presente para considerar cuál es el criterio que corresponde aplicar al caso bajo análisis.

A tal fin, es determinante analizar si la modificación del proyecto implica la generación de impactos adicionales no comprendidos en la EIA, o un cambio en la significancia de los impactos evaluados.

- Normativa comparada

En cuanto al planteo o necesidad de realizar modificaciones a proyectos ya aprobados por Declaración de Impacto Ambiental, cabe considerar las soluciones que ofrecen los diversos ordenamientos jurídicos para los mismos casos planteados.

En general, se ha hallado que las normas analizadas contemplan si los cambios resultan de consideración, es decir si las modificaciones son sustanciales o de una magnitud tal que pudieran generar una alteración relevante de los impactos ya evaluados; o si, por el contrario, se trata de cambios que no generan nuevos impactos, ni incrementan la incidencia de los impactos previamente analizados. En el primero de los casos se prevé el inicio de un nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental, mientras que en el segundo supuesto la situación se resuelve a través de un trámite administrativo, sin exigir un nuevo proceso de evaluación de impacto ambiental.

En ese sentido, cabe mencionar a la normativa de Chile, en el Decreto n.º 40 reglamentario de la Ley n.º 19.300, que define a la modificación de un proyecto o actividad al decir que esta consiste en la “realización de obras, acciones o medidas tendientes a intervenir o complementar un proyecto o actividad, de modo tal que éste sufra cambios de consideración...” y que “se entenderá que un proyecto o actividad sufre cambios de consideración cuando las obras o acciones tendientes a intervenir o complementar el proyecto o actividad modifican sustantivamente la extensión, magnitud o duración de los impactos ambientales del proyecto o actividad; o las medidas de mitigación, reparación y compensación para hacerse cargo de los impactos significativos de un proyecto o actividad calificado ambientalmente, se ven modificadas sustantivamente.” Es entonces el criterio del cambio o modificación sustantiva la que determina la necesidad de realizar una nueva evaluación de impactos enfocada a la modificación.

En ese sentido, Brasil² también nos señala que las modificaciones del proyecto que no impliquen una alteración relevante de la evaluación de impacto ambiental podrán hacerse en el mismo procedimiento del licenciamiento ambiental. A tales fines requiere que la solicitud de modificación acompañe la siguiente información: grado de alteración de la evaluación de impactos realizada en función de la modificación del proyecto; y justificación de la modificación luego del otorgamiento de la licencia ambiental.

Por su parte, Colombia establece en su Decreto n.º 1076 de 2015 la figura de la Modificación de la Licencia Ambiental para cuando se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental o para el caso de que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo consagrado en la licencia ambiental; estableciendo que en los casos de cambios menores no es necesario modificar la licencia ambiental otorgada.

De igual modo, la Resolución n.º 0855/22 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de ese país, detalla los casos en los que no se requerirá trámite de modificación de la licencia ambiental para aquellas obras o actividades consideradas cambios menores o de ajuste normal dentro del giro ordinario de los proyectos de

hidrocarburos que cuenten con licencia ambiental. En esta norma se efectúa una enumeración no taxativa de los “cambios menores”, estableciendo que previo a su ejecución el titular de la licencia ambiental deberá presentar ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), un informe en el que se describa de manera detallada las actividades a ejecutar, a efecto de ser tenido en cuenta en el proceso de seguimiento y control ambiental

La Ley n.º 123 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que las modificaciones de los proyectos deben ser previamente notificadas a la autoridad, quien podrá ordenar la realización de una ampliación de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), rechazar la propuesta, aprobarse sin requerir ampliación o nuevo EIA, o requerir mayores precisiones luego de las cuales podrá aprobar la modificación o pedir un nuevo EIA luego del cual podrá expedirse por la aprobación o rechazo.

En la provincia de Buenos Aires, la Ley n.º 11.459 regula la emisión del certificado de aptitud ambiental para la radicación de industrias, estableciendo, en su artículo 10 que los establecimientos industriales ya instalados que deseen realizar ampliaciones, modificaciones o cambios en sus edificios, ambientes o instalaciones deberán solicitar el correspondiente Certificado de Aptitud Ambiental en forma previa a la correspondiente habilitación industrial.

Por su parte, el Decreto PBA n.º 531/19 establece que corresponderá emitir un nuevo Certificado de Aptitud Ambiental (CAA), en el caso de que un establecimiento industrial modifique su categoría, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley N° 11.459, en el marco de un proceso de reclasificación, según la magnitud del cambio solicitado y el nivel de complejidad ambiental.

Se advierte, entonces, que en la normativa comparada analizada, se diferencia entre los casos cuyas modificaciones son sustantivas y requieren un nuevo trámite de licencia ambiental; y aquellos casos que implican sólo cambios menores, los cuales se resuelven a través de la presentación de un informe detallado por parte del titular de la licencia y un proceso administrativo a cargo de la autoridad orientado a la verificación de lo manifestado, sin exigir la realización de un nuevo estudio de impacto ambiental, ni emisión de una nueva licencia ambiental.

- Análisis del presente caso

En los presentes, la Empresa Equinor Argentina B.V. Sucursal Argentina (C.U.I.T. 30-71578830-2) realizó la presentación que dió inicio al expediente EX-2023-50348355- -APN-DGAYF#MAD en el cual, mediante IF-2023-50331700-APN-DGAYF#MAD, planteó la necesidad de ejecutar el proyecto de pozo exploratorio denominado “Argerich-1” Cuenca Argentina Norte (Bloque CAN 100)” en una nueva ventana operativa, acompañando el análisis de sensibilidad correspondiente a la nueva fecha propuesta.

Como correlato de la petición de Equinor, y por imperativo legal, la SCCDSEI a través de la Dirección de Evaluación Ambiental (DNEA) dio inicio al proceso de revisión de la petición a fin de dar una respuesta en tiempo y forma.

Conforme a la Decisión Administrativa N° 928/2021, mediante nota NO-2023-55823535-APN-DEIAYARA#MAD, se corrió traslado de la solicitud de modificación de ventana a las áreas pertinentes en las diferentes materias sustantivas a saber: Dirección Nacional de Exploración y Producción dependiente de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, Dirección Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, Dirección de Planificación Pesquera de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca dependiente del Ministerio de Economía, Administración de Parques Nacionales y Dirección de Protección Ambiental, dependiente de la Prefectura Naval Argentina.

Asimismo, de acuerdo a las competencias específicas, tomó intervención la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Análisis del Riesgo Ambiental (DEIAYARA) y realizó un análisis técnico de validez de las modelaciones presentadas en el EslA para las nuevas ventanas temporales propuestas, documentado mediante IF-2023-61932838-APN-DEIAYARA#MAD.

A su vez, se realizó un requerimiento de información al titular de la DIA mediante NO-2023-67515503-APN-DEIAYARA#MAD, IF-2023-66959170-APN-DEIAYARA#MAD e IF-2023-67520528-APN-DEIAYARA#MAD, del que dio respuesta mediante EX-2023-68537789- -APN-DGDYD#JGM, donde incluyó una justificación del cambio de ventana y un análisis de los potenciales cambios en el análisis de impactos realizado en la EIA.

Siendo que es competencia de la SCCDSEI el determinar mediante la categorización si los proyectos de obra o actividad deben someterse al procedimiento regulado, y luego aprobar o rechazar los proyectos sometidos a una EIA, lo es también el analizar si frente a una modificación de un proyecto aprobado, se requiere la realización de una evaluación de impactos y, de ser así, de someter las modificaciones planteadas a la correspondiente tramitación.

En base a los fundamentos desarrollados, en lo que a la materia sustantiva de competencia de esta área refiere, se considera que no existirían impedimentos de orden legal para que, de estimarse procedente, la SCCDSEI resuelva sobre la cuestión planteada.

En ese sentido, esta intervención no excluye a las competencias de las autoridades fiscalizadoras, que se enfocan en la verificación del cumplimiento de la DIA por parte del titular y el PGA del proyecto aprobado.

Por lo expuesto, deberá notificarse la decisión tomada a las áreas de fiscalización, en el marco de la intervención de su competencia.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: EX-2023-50348355- -APN-DGAYF#MAD

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.